

*Mikel Buesa es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid.*

Voy a presentar las conclusiones de la ponencia “¿A dónde vamos? Prosperidad o declive”. El terrorismo ha supuesto una pesada rémora para la economía del País Vasco. Los atentados cometidos por ETA a lo largo de 3 décadas además de sus secuelas de muerte y destrucción, han generado grandes incertidumbres que han impedido alcanzar los niveles potenciales de inversión y han estimulado a muchas empresas a desplazar su producción a otras regiones. Como fruto de ello, el País Vasco ha reducido su participación dentro de la economía española, tanto en la producción como en el empleo y la población, lo que ha supuesto una pérdida de capital humano.

El Plan Ibarretxe, que ya ha producido efectos negativos, puede acabar consolidando e incluso empeorando este estado de cosas. Por su sentido rupturista, separará al País Vasco del resto de España y también de la Unión Europea. Esta separación tendrá como consecuencia la aparición de fronteras y la existencia de barreras al comercio exterior de bienes y servicios. Debido a la estrecha vinculación existente entre el País Vasco y el resto de España, así como con los demás países de la Unión Europea, los aranceles y otros costes de transacción en los que se concretarán estas barreras reducirán las exportaciones vascas y con ello la actividad productiva y el empleo en las empresas.

Así mismo, muchas empresas del País Vasco para no perder sus principales mercados en el resto de España se trasladarán total o parcialmente fuera de la región. Ello ocasionará reducciones adicionales de producción y empleo y tendrá repercusiones negativas en las pequeñas y medianas empresas dentro de la industria, el comercio y los servicios. Al separarse de España y de la Unión Europea, el País Vasco quedará fuera del área del euro, inevitablemente el Gobierno Vasco tendrá que emitir una nueva moneda. Una consecuencia importante de esta nueva situación monetaria será la elevación de los tipos de interés. Ello encarecerá las inversiones empresariales prolongando la reducción de actividad y empleo y además, enfrentará a los consumidores, principalmente los de viviendas, a un encarecimiento de los créditos hipotecarios reduciendo su riqueza financiera.

El marco de prosperidad que ha disfrutado el País Vasco ha sido posible por el respaldo financiero del Estado dentro o a través del sistema del concierto económico. Al separarse de España el País Vasco también renunciará a las ventajas que supone este sistema.

La secesión puede hacer inviable el estado del bienestar, pues los gastos de la seguridad social, principalmente las pensiones, son mayores que los ingresos por cotizaciones. El desfase entre pensiones y cotizaciones será creciente en el futuro, de manera que sólo a través de la solidaridad nacional que lleva implícita el sistema de caja única de la Seguridad Social los pensionistas vascos podrán obtener la totalidad de las pensiones a

las que tienen derecho.

Además, un País Vasco independiente deberá asumir los costes derivados del ejercicio de las competencias que actualmente corresponden al Estado. Ello supondrá un aumento mayor de los gastos que el de los ingresos públicos y para financiar esta diferencia será necesario aumentar los impuestos y cotizaciones sociales o bien reducir el gasto público con el consiguiente empeoramiento de los servicios ofertados por el sector público.

La continuidad del sistema institucional establecido por la Constitución y el estatuto de Autonomía es necesaria para evitar estos efectos tan negativos. La propuesta del Lehendakari Ibarretxe, de llevarse adelante, acarreará severas consecuencias económicas para las empresas y los ciudadanos del País Vasco. Las empresas se enfrentarán a una incertidumbre creciente, mayores costes para gestionar sus transacciones exteriores, aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, tipos de interés más elevados y pérdida de mercados. Los ciudadanos verán como empeora su nivel de vida, pues encontrarán menores oportunidades de empleo, las pensiones tendrán que reducir su cuantía, se pagarán más impuestos y se recibirán unos peores servicios públicos.

Por todo ello, es necesario el cambio hacia la libertad.